

1646

LUIS DíEZ-PICAZO
Catedrático de Derecho Civil
Ex Magistrado del Tribunal Constitucional

ANTONIO GULLÓN
Catedrático de Derecho Civil
Magistrado del Tribunal Supremo

SISTEMA DE DERECHO CIVIL

VOLUMEN I

Introducción. Derecho de la persona.
Autonomía privada. Persona jurídica

NOVENA EDICIÓN


tecnos

BARROS LETELIER Y CIA. LTDA.
BIBLIOTECA

ródo de tiempo para que pueda considerarse plena y definitivamente adquirido por su titular (p. ej., derecho aplazado), o cuando el paso de un período de tiempo determina la extinción del derecho. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual duran un determinado número de años.

El tiempo, puede, además operar como una condición o límite de los actos de ejercicio del derecho. El derecho subjetivo debe ejercitarse tempestivamente y en tiempo oportuno. Se considera intempestivo el ejercicio retrasado, que adopta dos formas básicas: la prescripción y la caducidad.

BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

- A) LÓPEZ BERENGUER: *La colisión de derechos*, Murcia, 1956.
 B) CASTRO LUCINI: *Algunas consideraciones sobre la buena fe en la obra del profesor Federico de Castro*, A.D.C., 1983, p. 1227; CORRADINI: *Il criterio de la buona fede e la scienza del Diritto privato*, Milán, 1970; COSSÍO: *El dolo en el Derecho civil*, Madrid, 1955; DE LOS MOZOS: *El principio de la buena fe*, Barcelona 1965; DíEZ-PICAZO: *La doctrina de los propios actos*, Barcelona, 1963; GÓMEZ ACEBO: *La buena y la mala fe: su encuadramiento en la teoría del Derecho y su eficacia en el Código civil*, R.D.P., pp. 101 y 192; HAMBURGER: *Treu und Glauben im Verkehr*, Mannheim, 1930, RIEZLER: *Venire contra factum proprium*, Leipzig, 1912; SACCO: *La buona fede nella teoria dei fatti giuridici di Diritto privato*, Turín, 1960; WEBER: *Treu und Glauben*, Berlín, 1961.
 C) BUTTIN: *L'usage abusif des droits*, Grenoble, 1904; CALVO SOTELLO: *La doctrina del abuso del derecho*, Madrid, 1917; CAMPION: *La théorie de l'abus du droit*, 1925; DíEZ-PICAZO: *Abuso del derecho y fraude a la ley en el nuevo Título Preliminar del Código civil*, I.J., 1974 (octubre-diciembre), p. 203; FAIRÉN MARTÍNEZ: *El abuso del derecho*, R.D.N. (enero-marzo), 1960, p. 425; GIORGIANNI: *L'abuso del diritto nella teoria della norma di diritto*, Milán, 1963; JORDANO BAREA: *Dictamen sobre abuso del derecho y fraude a la ley*, A.D.C., 1960, p. 958; JOSSERAND: *De l'abus de droit*, París, 1914; LLUIS Y NAVAS: *El ejercicio antisocial del derecho*, R.G.L.J., 1980, p. 115; RESCIGNO: *L'abuso del diritto*, R.D.C., 1965, I, p. 205; ROMANO, S.: *Abuso del diritto (diritto attuale)*, E.D., t. I, p. 166.

32. LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD

I. LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN EL CÓDIGO CIVIL: PRESUPUESTOS Y FUNDAMENTO

El Título XVIII del Libro IV del Código civil, dedicado a las obligaciones y contratos, lleva por rúbrica general «De la prescripción». Su Capítulo II regula la «prescripción del dominio y demás derechos reales», llamada también prescripción adquisitiva o usucapión, y el Capítulo III la «prescripción de acciones», conocida también como prescripción extintiva o simplemente prescripción. Ambos Capítulos están precedidos por otro, el I, que contiene una serie de normas comunes a ambas prescripciones.

La usucapión está considerada como un modo de adquirir la propiedad y derechos reales mediante la posesión que ha durado un determinado tiempo y otras condiciones que señala la ley, mientras que la prescripción extintiva es una causa de extinción que lo mismo afecta a aquellos derechos que a los relativos o de crédito. La adquisición de la propiedad por usucapión que realiza el poseedor de la cosa provoca la extinción de la titularidad del verdadero propietario ya que no podrá ejercitar la acción para reivindicarla de aquel poseedor pese a que no ha transcurrido el plazo marcado para la prescripción extintiva de dicha acción (arts. 1.962 y 1.963). No obstante, es problema discutido en la doctrina si la proposición contraria es cierta, a saber, si cabe una prescripción extintiva del dominio por el no ejercicio de la acción reivindicatoria en el plazo señalado en la ley, aunque nadie haya ganado por usucapión la cosa. Tal cuestión se examinará en el volumen de esta obra dedicado a los Derechos de cosas, aunque aquí debemos reseñar nuestro criterio de que prescripción adquisitiva y extintiva en materia de dominio y derechos reales son siempre dos vertientes o dos perspectivas del mismo fenómeno jurídico. Mientras no se gane el dominio o derecho real por usucapión, la acción real reivindicatoria no se debe considerar extinguida¹.

¿Por qué se produce la extinción de un determinado derecho por la prescripción? Porque se dan «las condiciones determinadas en la ley», según expresa el artículo 1.930.2.º o «por el mero lapso de tiempo fijado en la ley», concreta más el artículo 1.961.

Pero el transcurso del tiempo fijado en la ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho.

La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un

¹ DíEZ-PICAZO: *La prescripción en el Código civil*, Barcelona, 1964, pp. 49 y ss. Contra, ALBALADEJO: *La prescripción de la acción reivindicatoria*, A.D.C., 1990 (1), pp. 25 y ss. Vid. la sentencia de 29 de abril de 1987.

tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene. Por esto algunos autores hablan de la necesidad del «silencio de la relación jurídica» (ALAS, DE BUEN, RAMOS). Esta idea es más apropiada para los derechos de créditos que para los derechos reales. En aquéllos, el acreedor no exige y el deudor no cumple ni reconoce nada; en los últimos, hay una actividad del tercero sobre la cosa (la posee), sin que su propietario reaccione.

En realidad, la prescripción extintiva no sanciona tanto la inercia del titular del derecho como la falta de defensa del mismo, según observó CARNELUTTI. El propietario que no goza de la finca no pierde nada, sólo si frente al goce de un tercero que se inmiscuye en ella no reacciona ejercitando la acción oportuna.

Por lo que respecta al fundamento de la prescripción parece acertada la idea de que es una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, introducida en atención al bien público. No es justo que una persona resucite pretensiones antiguas, de las cuales incluso puede haberse perdido la memoria, y que ponga en peligro con ello la situación quieta y pacíficamente mantenida por otras personas durante largo tiempo. Por el contrario, es justo que el titular de un derecho sea diligente en orden a su ejercicio, y que si no lo es, el perjuicio deba pararle a él. En suma, la prescripción impide el ejercicio intempestivo de un derecho.

El fenómeno de la prescripción ha sido ligado en ocasiones con la voluntad real o presunta de la persona. Se considera como fundamento de la prescripción la presunción de abandono o de renuncia que la prolongada inercia del titular suscita. Aun cuando esta tesis ha sido utilizada en ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es exacta. Un derecho no prescribe porque su titular haya querido renunciar o porque esta renuncia se presume, sino porque objetivamente ha transcurrido un determinado período de tiempo sin que el derecho se haya ejercitado, cualesquiera que hayan podido ser las causas de la falta de ejercicio. Si el fundamento de la prescripción estuviera en una presunta voluntad del titular del derecho, no debería funcionar si se demostrara que no había existido la voluntad de renuncia. Sin embargo, es claro que funciona de una manera objetiva y con total independencia de esa voluntad. Si existe, sólo puede manifestarse interrumpiendo la prescripción, de la forma prevenida legalmente, no bastando el mero hecho de tenerla.

La interpretación de las normas sobre la prescripción, se ha sostenido reiteradamente en la jurisprudencia, ha de hacerse en un sentido restrictivo pues es una institución que no se basa estrictamente en la justicia, lo que quiere decir que debe tener como finalidad el mantenimiento de la acción presuntamente afectada. Pero esta dirección interpretativa no puede llevar a afirmar que ha existido interrupción de la prescripción cuando no se está en presencia de los hechos que la ley considera como tales y únicamente ellos.

II. OBJETO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

El Código civil lleva como rúbrica de su Capítulo III del Libro XVIII «De la prescripción de acciones», y todos los preceptos que lo desarrollan mencionan a

las acciones como objeto de la prescripción. La acción hay que considerarla aquí como la facultad o poder de exigir a otro un comportamiento, activo o positivo, para la satisfacción de nuestro interés, y se reclama del órgano judicial. En otros términos, la acción es el derecho a la tutela concreta de un determinado derecho subjetivo o parte del mismo (p. ej., quedará sujetas a la prescripción extintiva las acciones para reclamar rentas atrasadas, pero no el derecho de arrendamiento).

Frente a la tesis de la prescripción de acciones se alza otra, más seguida, serán la cual lo que prescribe es el derecho. Se argumenta que un derecho subjetivo que no pudiese hacerse valer en juicio es un derecho desnaturalizado. ¿Qué sentido tiene afirmar que el acreedor puede exigir extrajudicialmente el pago, cuando el deudor al negarse no está sujeto a la posibilidad de que judicialmente se le obligue? Los defensores de esta tesis entienden que el derecho subjetivo prescrito da lugar a una «obligación natural». El deudor está moralmente obligado a pagar, aunque el acreedor carezca del poder jurídico de exigir el cumplimiento de la prestación. Pero el argumento no es convincente ni resuelve el problema, porque en esta obligación falta precisamente aquel poder, en otras palabras, todo derecho subjetivo. Su único efecto es la *solutio retentio*; si el deudor paga espontáneamente carece de acción para repetir el pago alegando que no estaba obligado.

La tesis de la «prescripción de derechos» considera que la prescripción determina la extinción del derecho subjetivo, definido como poder jurídico que agrupa unitariamente un conjunto de facultades. Es la más seguida por la doctrina, aunque presenta problemas su admisión. A veces no se extingue por entero el derecho subjetivo, sino que se limita o reduce. Así, por ejemplo, el arrendador que se retrasa en exigir el pago de rentas no pierde en modo alguno el poder de exigir las sucesivas, lo mismo que si un tercero adquiere por usucapión un derecho de usufructo (art. 468), porque durante todo el tiempo de su posesión como usufructuario el propietario no hizo uso del poder de defender la libertad de su predio contra injerencias extrañas. Este propietario no ha perdido el derecho subjetivo de propiedad, sino aquellas facultades de uso y goce de su cosa que serán en adelante del usufructuario por todo el tiempo que dure su derecho, por no haber ejercitado contra él las oportunas acciones de condena².

¿Qué derechos son los sometidos a prescripción? La regla general del artículo 1.930 es la prescriptibilidad de todos los derechos y acciones «de cualquier clase que sean». No obstante, la disposición legal debe entenderse referida a derechos relativos o de créditos y derechos reales, es decir, derechos de naturaleza patrimonial. Por otra parte, y dada la necesaria distinción entre prescripción y ca-

² DÍEZ-PICAZO (*La prescripción en el Código civil*, Barcelona, 1964, p. 37) afirma que la prescripción, en cuanto afecta a facultades, sólo afecta al derecho subjetivo mediamente porque lo modifica, limita o reduce. Pero cuando la facultad que prescribe es la que podríamos llamar central o esencial del derecho subjetivo, como es, por ejemplo, la de reivindicar respecto del derecho de dominio o la de reclamar la deuda respecto del derecho de crédito, la pérdida de la facultad coincide necesariamente con la pérdida del derecho.

ducidad, hay acciones que aunque se extingan por su no ejercicio en un tiempo determinado, no por ello estarán sometidas a la prescripción sino a la caducidad.

También ha de exceptuarse de la prescripción extintiva la acción para reclamar alimentos al que debe prestarlos por disposición legal en los supuestos de deuda alimenticia entre parientes, si bien lo imprescriptible aquí es el derecho a reclamarlos, no las pensiones devengadas y no exigidas. Se considera que el derecho a pedir alimentos es esencial para la vida del necesitado de ellos y no puede extinguirse nunca (art. 151).

Es imprescriptible la acción para obtener la declaración de nulidad absoluta (o inexistencia) de un negocio jurídico. Sin embargo, los efectos restitutorios que se persigan como consecuencia de la nulidad están afectados por la prescripción. Las acciones restitutorias que se ejercitan con la de nulidad de un contrato, por ejemplo, para lograr la restitución de la cosa entregada, prescriben como cualquier otra acción (Ss. de 27 de febrero de 1964 y 13 de abril de 1988). Claro está que todo ello partiendo de que la restitución haya de ser objeto de petición expresa y no se considere como un efecto automático de la declaración de nulidad (art. 1.303; S. de 24 de marzo de 1995).

Según el artículo 1.965, no prescriben entre coherederos la acción para pedir la división de herencia, entre comuneros la de división de la cosa común, y la de deslinde entre propiedades contiguas. Mientras se mantenga la comunidad de bienes o la indivisión de la herencia o las propiedades colindantes, ninguna razón hay para establecer la prescripción.

¿Prescriben las excepciones? Las mismas son, en términos generales, medios de defensa en el proceso del demandado, que no implican pretensión alguna del mismo frente al actor, sólo alega hechos impeditivos o extintivos que destruyen la acción o sus efectos jurídicos, o bien la paralizan temporalmente (excepciones dilatorias). Si lo que se alega por vía de excepción pudo alegarse por vía de acción, la excepción debe prescribir. Si la excepción envuelve al ejercicio de un derecho para el que no cabe la vía de la acción, la excepción no prescribe. Así ocurre, por ejemplo, con el derecho de retención que tiene el poseedor de buena fe vencido en juicio por el verdadero propietario (art. 453): no se le puede acusar de inercia mientras que no se le pida la restitución.

III. PERSONAS PERJUDICADAS POR LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

El Código civil no ha seguido la vieja regla contra *non valentem agere non currit praescriptio*, por lo que dice en el artículo 1.932 que «los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley», aunque a continuación establece que «quedan siempre a salvo a las personas impedidas para administrar sus bienes el derecho a reclamar contra sus representantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido causa de la prescripción». Consecuencia de este criterio es el artículo 1.934, a cuyo tenor «la prescripción produce sus efectos jurídicos a fa-

vor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y para deliberar». Es decir, no hay interrupción por el hecho de que el titular del derecho que está prescribiendo haya fallecido y sus herederos no hayan aceptado todavía la herencia o hayan solicitado un plazo para deliberar sobre si aceptan o repudian a la vista del inventario que hay que hacer.

IV. COMIENZO DEL PLAZO PRESCRIPTIVO Y SU CÓMPUTO

La determinación del momento inicial del cómputo de la prescripción ha sido siempre una cuestión discutida en la doctrina. Para resolverla, los antiguos autores formularon la llamada «teoría de la actio nata», conforme a la cual, para que pueda comenzar a contarse el tiempo de la prescripción es menester que la acción haya ya nacido. El problema radica en determinar cuándo nace. Nuestro Código civil se limita a preceptuar con carácter general: «El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse» (art. 1969). Pero hay que determinar éste.

La teoría más antigua es la llamada de la «lesión», con arreglo a la cual el derecho subjetivo ha de ser lesionado por un tercero. Pero como existen derechos que pueden ser lesionados sin acción (p. ej., el deudor que se niega simplemente a pagar la deuda a su vencimiento), la teoría de la «insatisfacción» sostiene que el inicio del plazo prescriptivo debe arrancar desde la insatisfacción del derecho.

Bien miradas las cosas, insatisfacción y lesión son dos formas de violación del derecho, que se corresponden con la naturaleza y estructura de éste. Por lesión puede decirse que se viola cuando hay un acto positivo del tercero, y, en cambio, por insatisfacción cuando el comportamiento del tercero es omisivo. Hay lesión por comportamiento positivo en los derechos reales y en los derechos de crédito cuyo contenido sea una prestación de no hacer que deba cumplir el deudor u obligado, que éste incumple ejecutando lo prohibido hacer. Hay comportamiento omisivo en el deudor que no cumple su prestación.

¿La posibilidad de ejercicio de la acción ha de estimarse en sentido subjetivo u objetivo? Dicho en otros términos, ¿basta que exista la lesión o insatisfacción que hemos comentado anteriormente, o es necesario que el titular la conozca? la sentencia de 10 de octubre de 1977 declaró que «un derecho no está en condiciones de ser reclamado en tanto no se conozca su existencia, contenido, alcance y efecto», pero estas circunstancias han de interpretarse de una manera objetiva, prescindiendo de las condiciones personales del que puede ejercitarlo. Así lo exige la necesidad de dar firmeza cuanto antes a las relaciones jurídicas, el no resucitar pretensiones cuya memoria se haya perdido con el transcurso del tiempo, en definitiva, la paz y seguridad jurídica, finalidades a las que en última instancia sirve la prescripción. El Tribunal Supremo ha seguido ese criterio interpretativo precisamente cuando la literalidad del Código civil cons-

tituiría una base para la interpretación subjetiva. Nos referimos al artículo 1.968.2.º, que señala el *dies a quo* del plazo prescriptivo de la acción para reclamar la responsabilidad civil derivada de los delitos de calumnia o injuria, o por culpa o negligencia extracontractual, «desde que lo supo el agraviado». El Alto Tribunal siempre insiste en fijar el *dies a quo* en el momento en que *pudo* conocerse la lesión y su alcance³.

Después de haber sentado el artículo 1.969 la regla general para el comienzo del plazo prescriptivo, establece las siguientes particularidades:

a) Dice el artículo 1.970 en su párrafo 1.º que «el tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital, con interés o renta, corre desde el último pago de la renta o interés». Decía GARCÍA GOYENA que «hasta que se deje de pagar el interés o renta hay un reconocimiento indudable, de parte del deudor, de la obligación de pago». Por tanto, lo que quiere decir el legislador es que mientras se esté pagando interés o renta, la acción para reclamar el capital no prescribe. Por otra parte, para que se dé este prescripción es necesario que la obligación de pagar el capital sea ya exigible: la simple falta del pago del interés no determina automáticamente el vencimiento y exigibilidad de aquella obligación, salvo que se haya pactado expresamente. También conviene resaltar que la disposición se refiere exclusivamente a la fijación del momento en que empieza a correr la prescripción de la acción para exigir el capital, no los intereses, cuyo *dies a quo* será el del vencimiento siguiente al que se ha satisfecho, pues no puede decirse que se deja de pagar la renta o interés precisamente cuando se acaba de pagar un plazo.

Los párrafos 2.º y 3.º del artículo que comentamos fijan el comienzo de la prescripción de la acción para reclamar el capital del censo (vid. arts. 1.605, 1.606 y 1.607 para la definición de sus diferentes especies), desde el último pago de la renta o pensión. En realidad se trata de la prescripción extintiva del derecho del censo (derecho a exigir la pensión), y la consiguiente liberación de la carga censal, por lo que la acción que prescribe es una acción real (art. 1.620).

b) El artículo 1.971 contiene otra regla especial al declarar que «el tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme». Es jurisprudencia reiterada que la sentencia ha de ser notificada para que comience la prescripción.

c) Conforme al artículo 1.972, el tiempo para la prescripción de las acciones para exigir rendición de cuentas «corre desde el día en que cesaron en sus cargos los que debían rendirlas». En cambio, la que tiene por objeto exigir el resultado de las cuentas, «desde la fecha en que esté reconocido por conformidad de las partes».

³ Sentencias de 11 de noviembre de 1968, 28 de octubre de 1994 y 31 de marzo de 1995 y las que en ellas se citan.

Por último, en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción el Código civil establece las siguientes reglas (art. 1.960): 1.º El día en que comienza a contarse el plazo se tiene por entero. 2.º El último día debe cumplirse en totalidad. En lo demás, rige el artículo 5.º del Título Preliminar.

V. INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

Si la causa de la prescripción es el «silencio de la relación jurídica», es claro que la ruptura del silencio impedirá que la prescripción se produzca. Por «interrupción de la prescripción» conocemos, pues, las causas que determinan un impedimento de la prescripción e imponen que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero.

La interrupción es figura netamente distinta de la *suspensión* de la prescripción. En la suspensión hay una paralización del plazo prescriptivo, pero conserva su eficacia, pues el tiempo posterior a la suspensión se suma a él. La interrupción, por el contrario, lo borra, y el tiempo debe contarse de nuevo una vez cesada la eficacia de la causa interruptiva.

Nuestro Código civil no conoce la figura de la suspensión de la prescripción, aunque se admite jurisprudencialmente la posibilidad de que pueda ser acordada por las partes (S. de 16 de diciembre de 1957).

Las causas de interrupción de la prescripción están enumeradas en el artículo 1.973 del Código civil, y son las siguientes:

1.º El ejercicio judicial del derecho⁴. Bajo esta rúbrica hay que entender incluido el hecho de la formulación de la demanda, como también la solicitud de conciliación admitida a trámite (art. 479 L.E.C.). No se requiere el triunfo de la acción ejercitada. También debe estimarse como causa el planteamiento de la cuestión ante árbitros ya que su laudo tiene los efectos de una sentencia.

2.º El ejercicio extrajudicial del derecho. Cualquier reclamación por el titular del derecho a sujeto pasivo interrumpe la prescripción (v. gr., un requerimiento notarial, una carta). El problema será el probar la fecha del acto interruptivo⁵.

3.º El reconocimiento del derecho. Puede ser expreso o tácito, y haberse hecho con la finalidad de interrumpir la prescripción que corre en favor del que reconoce, o con otra distinta. Por ejemplo, el deudor que paga en el plazo de prescripción los intereses de la deuda está reconociendo ésta.

El acto interruptivo no ha de ser necesariamente efectuado por el titular del derecho. Es eficaz el ejecutado por su representante legal o mandatario (Ss. de 18

⁴ Respecto de la eficacia interruptiva de la vía penal, vid. la sentencia de 30 de octubre de 1993 (Sala 1.ª, T.S.).

⁵ Esta causa interruptiva se acoge también para los créditos mercantiles en la sentencia de 4 de diciembre de 1995, no obstante la literalidad del artículo 944 C. de c.

de enero de 1968 y 27 de junio de 1969), incluso por mandatario que manifieste obrar en nombre del titular (S. de 9 de diciembre de 1983).

VI. EFECTOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

¿Es preciso para que la prescripción tenga lugar que la invoque expresamente el interesado en servirse de ella o puede, en cambio, el juez acogerla de oficio una vez que aparezcan probados los hechos en que ella se asienta? Frente a la norma clara (art. 1.943) del Proyecto de 1851 en el primero de los sentidos, el Código civil guarda un completo silencio. Pero si tenemos en cuenta que el favorecido con la prescripción puede renunciar a ella expresa o tácitamente (art. 1.935), es claro que no es institución que el juez pueda estimar de oficio, sino que su juego se deja a voluntad exclusiva del interesado o favorecido, que es quien ha de oponerla frente a la reclamación o ejercicio intempestivo del derecho. De ahí se deduce también que el cumplimiento del plazo legal de prescripción produce el efecto automático de atribuir al interesado la facultad de oponer la prescripción, cuyas consecuencias se retrotraen al momento de aquel cumplimiento.

La invocación o alegación de la prescripción no tiene que hacerse necesariamente dentro de un juicio. Es posible un ejercicio extrajudicial de la facultad de oponerla, como sucederá si el deudor rehúsa pagar la deuda ante la reclamación de su acreedor, o el que ejerce un derecho real en cosa ajena se niega a variar de conducta ante la reclamación del propietario que se lo exige (v. gr., quien goza y usa como usufructuario una finca rústica).

Aunque la prescripción extintiva es un medio de defensa del demandado en un proceso, y así suceda en la gran mayoría de casos, nada se opone a que el favorecido con la prescripción tome la iniciativa judicial, pidiendo al juez que declare la situación jurídica que la prescripción ha creado en su favor.

VII. AUTONOMÍA PRIVADA Y PRESCRIPCIÓN

La naturaleza y finalidad de la prescripción obliga a determinar las relaciones existentes entre su ordenamiento legal y la autonomía privada. Se trata de averiguar si poseen validez los negocios jurídicos celebrados por los particulares con el fin de establecer entre ellos un régimen de prescripción de derechos y acciones diferentes del legal. Esta cuestión puede recibir soluciones diversas.

Si solamente se considera que la prescripción sirve a la paz jurídica, a la seguridad general y al bien público, y que son razones de utilidad social las que la fundamentan, como las normas dirigidas a ello no pueden quedar al arbitrio de los particulares, se deduciría inmediatamente la idea de la absoluta imperatividad de las que componen el régimen legal en materia de prescripción y, por consi-

guiente, la invalidez de cualesquiera negocios o convenios destinados a modificarlo inter partes.

Esta conclusión puede ser criticada. Si bien es cierto que en la prescripción existe una razón de utilidad social, no lo es menos que tutela un interés privado; el interés del demandado o sujeto pasivo del derecho. La prescripción es un medio de defensa o de tutela de que éste dispone para paralizar o enervar la pretensión del demandante. De ahí la admisibilidad al menos de algunos negocios jurídicos sobre la prescripción como el de su renuncia. La admisibilidad de la renuncia a la prescripción ganada está reconocida por el artículo 1.935. Esta renuncia es un negocio jurídico que se realiza por una manifestación de voluntad del sujeto favorecido por la prescripción. Puede ser un negocio jurídico unilateral. Pero puede ser también —no hay en ello ningún inconveniente— bilateral, y resultar de un convenio del beneficiado por la prescripción con el perjudicado por ella.

En la medida en que una prescripción en curso supone ya una prescripción parcialmente consumada no hay dificultad en admitir que también sobre ella pueden las partes disponer lo que tengan por conveniente.

En los negocios jurídicos sobre la prescripción que pueda ocurrir en el futuro las cosas presentan un cariz diferente. El artículo 1.935 declara la irrenunciabilidad del «derecho a prescribir para lo sucesivo», pero esta norma no es prohibitiva, por sí sola, de toda clase de aquellos negocios. En rigor, lo único que hace es impedir que un derecho legalmente prescriptible sea imprescriptible por voluntad de las partes. También deben considerarse ineficaces los pactos que traten de convertir un derecho imprescriptible en prescriptible, por que la imprescriptibilidad se halla fuera de la autonomía de la voluntad de los particulares, es la ley la que la determina.

Dentro de los negocios que estamos analizando ocupan un lugar importante los que pretenden acortar los plazos de prescripción y los que, por el contrario, pretenden alargarlos.

Respecto de los primeros, no hay duda de su validez en términos generales, dado que favorecen la seguridad de los derechos y relaciones jurídicas. Pero la autonomía de la voluntad, si bien se puede desplegar en esta materia, no hay duda de que ha de respetar los otros límites en que se ha de desenvolver en cualquier circunstancia: moral, orden público y buenas costumbres (art. 1.255). Por ello no sería válido un pacto que acortase de tal manera los plazos que dejase sin posibilidad real de ejercitar el derecho a su titular, o lo dificultase de manera notoria.

En cuanto al alargamiento de los plazos legales de prescripción, un sector de la doctrina se inclina a su invalidez, porque significaría «una renuncia anticipada a la prescripción en el plazo legal» contraria al artículo 1.935, lo que no parece exacto, pues el precepto citado prohíbe sólo la imprescriptibilidad establecida convencionalmente, y no se infiere de ello la prohibición del alargamiento de los plazos legales, salvo naturalmente los que por su extensión conviertan de hecho lo prescriptible en imprescriptible. La cuestión pudiera resolverse afirmativamente en coherencia con la doctrina jurisprudencial que obliga a interpretar las cues-

ciones dudosas en torno a la prescripción contra el que la alega, es decir, en favor del mantenimiento de la existencia del derecho.

Por último, hay que decir respecto a los pactos privados sobre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo, que la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que la regla del artículo 1.969, que se ocupa de ello, es de carácter netamente dispositivo (Ss. de 14 de febrero y 26 de mayo de 1994, entre otras)⁶.

VIII. PLAZOS LEGALES DE PRESCRIPCIÓN

El Código civil ha establecido una gama extensa de plazos de prescripción en

91791
LUIS DíEZ-PICAZO
Catedrático de Derecho Civil
Ex Magistrado del Tribunal Constitucional

ANTONIO GULLÓN
Catedrático de Derecho Civil
Magistrado del Tribunal Supremo

SISTEMA DE DERECHO CIVIL

VOLUMEN I

Introducción. Derecho de la persona.
Autonomía privada. Persona jurídica

NOVENA EDICIÓN

tecno

BARROS LETELIER Y CIA. LTDA.
BIBLIOTECA

E) LA PRESCRIPCIÓN ANUAL

El artículo 1.968 engloba estos supuestos en que el plazo prescriptivo es de un año.

1.º La acción para recobrar o retener la posesión. Todo poseedor, cualquiera que sea la causa por la que posea, es amparado y mantenido en su posesión. El que se crea con derecho a ella debe acudir a los Tribunales en demanda de lo que estime oportuno, pero no proceder por las vías de hecho (art. 441). El poseedor que sea despojado contra su voluntad, o que sea inquietado en su posesión por actos que manifiesten intención de inquietarle o de despojarle o que tiene fundados motivos para creer que lo será, posee legitimación para ejercitar unas acciones de efecto rápido, los llamadas interdictos, para conseguir la restitución o el cese de la perturbación, respectivamente.

De todas formas, conviene no olvidar que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala en el artículo 1.653 un plazo perentorio para la presentación de la correspondiente demanda. «El juez admitirá —dice— la demanda [...], si aparece presentada [...] antes de haber transcurrido un año a contar desde el acto que la ocasione»¹⁰.

2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y la que tiende a la reparación del daño ocasionado por cualquier acción u omisión en la que haya intervenido culpa o negligencia, sin estar las partes ligadas por relación jurídica (responsabilidad extracontractual; arts. 1.902 y ss. del Código civil). El plazo del año se cuenta *desde que lo supo el agraviado*¹¹.

En cambio, si se ejercita la acción de responsabilidad civil derivada de un delito o falta sancionado penalmente (vid. art. 109 C.p.) ante la jurisdicción civil y no en la que conoce del mismo, el plazo de prescripción es el general de quince años (Ss. de 27 de marzo y 2 de julio de 1979 entre otras muchas), que no empezará a correr mientras la jurisdicción penal esté conociendo. Esta dirección jurisprudencial es objeto de crítica, pues no hay diferencia intrínseca entre la responsabilidad civil nacida de una acción u omisión penada por la ley y ese mismo suceso, que, si bien no está penado, vulnera el principio general del Derecho *ne-minem laedere*.

IX. LA RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN

El artículo 1.935 del Código civil permite la renuncia a la prescripción ganada, no al derecho de prescribir en el futuro. Esta renuncia, negocio jurídico uni-

¹⁰ El artículo 1.968.1.º se refiere a acciones interdictales, no a otros juicios declarativos sobre posesión (S. de 10 de marzo de 1994).

¹¹ En la hipótesis de daños que se están produciendo continuamente, el año no empieza a correr mientras no desaparezca la causa determinante (S. de 16 de enero de 1989).

lateral, significa una renuncia a hacer valer la prescripción, nunca una hipotética resurrección del derecho subjetivo prescrito que lo adquiriría de nuevo el que lo perdió por la prescripción. Si el cumplimiento del plazo prescriptivo genera una facultad de operar la prescripción, parece claro que la llamada renuncia a la prescripción no es más que una renuncia a aquella facultad. El derecho subjetivo se extingue automáticamente por el transcurso del tiempo. De otra manera se llegaría al resultado de que un derecho subjetivo extinguido nace y se atribuye, sin contar siquiera con su voluntad, al anterior titular...

La renuncia lo mismo puede ser expresa que tácita. «Entiéndese tácitamente renunciada la prescripción —dice el párrafo 2.º del artículo 1.935— cuando la renuncia resulta de actos que hacen suponer el abandono de derecho adquirido». Una renuncia tácita es, por ejemplo, la no oposición de la excepción de prescripción a la reclamación de una deuda prescrita.

El artículo 1.937 consagra la ineficacia relativa de la renuncia respecto a otras personas distintas del titular del derecho y del obligado o sujeto pasivo. Dispone: «Los acreedores, y cualquiera otra persona *interesada en hacer valer la prescripción*, podrán utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario.» Obsérvese que no impone el precepto que la renuncia perjudique al acreedor o persona interesada, sino únicamente que se dé cualquiera de esas cualidades, ni exige que se impugne para que se declare ineficaz. Pero su interés marcará el límite del derecho que les concede el precepto para que se ejercite sin abuso. En lo que exceda de aquél, no podrá utilizarse la prescripción.

Si el titular del derecho prescrito poseía una preferencia para el cobro sobre un bien del deudor frente a otro acreedor de éste, la renuncia a hacer valer la prescripción hará que el primero cobre efectivamente, pero no con preferencia al segundo, si éste alega para impedirlo la prescripción.

El renunciante ha de tener capacidad para enajenar (art. 1.935).

X. LA CADUCIDAD

Una institución distinta de la prescripción extintiva es la caducidad. Se trata también de una forma de extinción de las acciones y de los derechos por el transcurso del tiempo, pero se distingue de la prescripción porque no le es aplicable enteramente el régimen jurídico de ésta. Singularmente, porque no es susceptible de interrupción y porque puede ser acogida de oficio por el juez aunque el interesado no la alegue.

El Código civil, en su redacción primitiva, no mencionaba la caducidad. Es verdad que en alguno de sus preceptos no habla de prescripción y utiliza otro tipo de expresiones. Así, por ejemplo, la acción «dura» o «durará» cuatro años (arts. 1.299 y 1.301); las acciones se «extinguirán» a los seis meses (art. 1.590); o «no podrá ejercitarse el derecho» sino dentro del plazo marcado (art. 1.594). La construcción del instituto de la caducidad fue primeramente doctrinal, a partir de la

obra DE BUEN, ALAS y RAMOS, y después sobre todo jurisprudencial, a partir de la sentencia de 30 de abril de 1940.

Dice así el primero de los considerandos de esta sentencia:

Dos maneras tiene la ley procesal civil de impedir que prosperen ante los tribunales los derechos cuya virtualidad se ha extinguido por el transcurso del tiempo prefijado, su eficaz ejercicio, la caducidad y la prescripción, conceptos no bien diferenciados ni defendidos, pero que, aun respondiendo ambos a la misma finalidad de que no permanezcan indefinidamente inciertos los derechos y fundándose en una común presunción de abandono, ofrecen la nota diferencial, entre otras, de que mientras la prescripción es renunciabile, por lo que sólo cuando se alega puede ser estimada, la caducidad no requiere su alegación y opera por sí misma, obligando al juzgador a declararla de oficio.

Una extensa jurisprudencia posterior ha insistido en la distinción entre caducidad y prescripción, subrayando que la caducidad se caracteriza por que entra en función automáticamente por ministerio de la ley y con independencia de la voluntad del sujeto afectado, por lo que es acogible de oficio por el juez y no es susceptible de interrupción (vid. S. de 7 de mayo de 1981).

Esta consagración jurisprudencial y doctrinal del instituto ha dado lugar a que, en las más recientes reformas del Código civil, la idea de caducidad, ausente, como habíamos dicho de la redacción primitiva, aparezca ya (cfr. arts. 43, 76 y 141).

El problema básico que la caducidad plantea es el de determinar cuándo estamos en presencia de ella o de la prescripción, en otras palabras, si una norma que establece un plazo para el ejercicio de un derecho es de caducidad o de prescripción ante la falta de calificación por el legislador. Las consecuencias prácticas, aparte de las ya enunciadas, son evidentes. En el primer caso, el ejercicio del mismo ha de hacerse precisamente dentro del plazo marcado, bajo pena de su extinción.

Un criterio de distinción aceptable es el derivado de la naturaleza del derecho objeto de presunta caducidad, pues ésta recae sobre lo que en su momento hemos llamado derechos potestativos o facultades de configuración o modificación de una situación jurídica preexistente. Pendiente el ejercicio, la situación jurídica afectada se encuentra en una fase provisional o transitoria, que exige un rápido tránsito a la situación definitiva. Piénsese en un contrato viciado por alguna de las causas que dan lugar a su anulabilidad (error, dolo, etc.). Origina una situación jurídica claudicante, porque produce efectos mientras no sea impugnado. Al ordenamiento jurídico le interesa que cuanto antes se aclare la situación, para que sean firmes e inacatables las consecuencias jurídicas que despliega. No puede tolerar que durante un lapso de tiempo indefinido estén sujetas a su desaparición, al restablecimiento de la situación existente antes de su celebración, que será más difícil a medida que nos alejamos del momento de la perfección del contrato. En cambio, en la prescripción nada impide que la duración

de un derecho se prolongue indefinidamente: un derecho de crédito prescribe a los quince años, pero no hay obstáculo para que mediante sucesivos requerimientos del acreedor o continuos reconocimientos del deudor, el derecho se prolongue sin límite alguno¹².

En definitiva, podemos decir que la diferencia entre la figura de la caducidad y de la prescripción se explica desde el punto de vista del interés jurídico protegido. La prescripción protege a un interés estrictamente individual, que es el interés del sujeto pasivo de los derechos o de las acciones, consistente en poder oponerse a un ejercicio tardío, cuando razonablemente no podía ya esperarse o cuando los medios de defensa han desaparecido o son de difícil actualización. Por ello, la prescripción ha de ser siempre alegada por el sujeto que trata de defenderse con ella, puede ser interrumpida y puede ser renunciada. La caducidad protege un interés general, que es el interés comunitario en la pronta certidumbre de una situación jurídica, que se encuentra pendiente de una posible o eventual modificación¹³. Esto explica que la caducidad se considere automática, y los poderes del juez para acogerla de oficio aunque el interesado no la alegue.

Ahora bien, este criterio general que acaba de exponerse no obliga al legislador, el cual puede calificar determinado plazo de caducidad aun no concurriendo en el supuesto el ejercicio de un derecho potestativo o de configuración jurídica, porque lo que quiere es establecer un plazo fijo y definitivo para deducir la acción, sin posibilidad de interrupción y que de nuevo vuelva a contarse, caso de que el plazo se reanude. Así lo hace en el artículo 43 reformado del Código civil en cuanto a una acción de reclamación de daños y perjuicios y el artículo 9.º5 de la Ley de 5 de mayo de 1982 respecto a las acciones protectoras frente a intromisiones ilegítimas en el honor, intimidad y propia imagen.

La caducidad no sólo tiene un origen legal sino también voluntario, según la jurisprudencia, que admite que cuando por convenio entre particulares no se pueda ejercitar un derecho pasado cierto plazo, hay una válida caducidad convencional (Ss. de 20 de mayo de 1972, de 18 de octubre de 1988 y 10 de noviembre de 1994).

BIBLIOGRAFÍA SUMARIA

ALAS, DE BUEN y RAMOS: *De la prescripción extintiva*, Madrid, 1918; DE ÁNGEL YÁGÜEZ: *Caducidad y autonomía privada*, La Ley, 1986, 4, p. 1005; *La interrupción de la prescripción extintiva por reclamación del acreedor en el Derecho comparado*, La Ley, 1986, 4, p. 1048; Díez-PICAZO: *La prescripción en el Código civil*, Barcelona,

¹² Este criterio es acogido en la sentencia de 10 de noviembre de 1994, apoyada en las numerosas que cita sobre el instituto de la caducidad.

¹³ Los rígidos rasgos y efectos de la caducidad aparecen debilitados en algunas sentencias que consisten en la suspensión de los plazos por acuerdo de las partes (Ss. de 30 de mayo de 1984 y 24 de enero de 1986).